

Bibliografía

- Aguilar Barajas, Ismael (1993). *Descentralización Industrial y desarrollo regional en México*, México, El Colegio de México.
- Garza, Gustavo (1990). *El carácter metropolitano de la urbanización en México, 1900-1988*, en *Estudios demográficos y urbanos*, vol. 5, núm. 1, México, Colmex, enero-abril de 1990.
- Garza, Gustavo (1992). *Desconcentración, tecnología y localización industrial en México*, México, El Colegio de México.
- Graizbord, Negrete y Ruiz. *Desarrollo urbano, sistema de ciudades y descentralización en México*, México, Tesis de Maestría, CEDDU, Colmex.
- Hernández Laos, E. (1989). "La desigualdad Regional en México (1900-1980)", en *La desigualdad en México*, México, Siglo XXI Editores.
- Kate, Ten (1979). "La protección, la concentración regional y la distribución interregional del producto interno", en *La política de protección en el desarrollo económico de México*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Martínez del Campo, Manuel (1985). *Industrialización en México*, México, El Colegio de México.
- Murayama, Appendini y Domínguez (1972). "Desarrollo desigual en México 1900 y 1960" en *Demografía y Economía*, vol. VII, núm. 1, México, Colmex, 1972.
- Osuna Castelán, G. (1990). "Dinámica de la desigualdad regional en México, 1970, 1980", en *Estudios demográficos y urbanos*, vol. V, núm. 1, México, Colmex, enero-abril de 1990.
- Ramírez Cruz, Ma. D. (1986). *Las desigualdades interregionales en México*, México, Colmex, Tesis de maestría. CEDDU.
- Sánchez, R. (1992). "Querétaro Industrial", en *Voz Crítica de Querétaro*, agosto de 1992.
- Censos Industriales 1960, 1970, 1980 y 1988.

Planeación y desarrollo regional. Una experiencia en Michoacán

Javier Pérez Corona*

Sin duda, la rica tradición del Estado mexicano en materia de implementación de planes y programas de desarrollo social es bastante conocida, como una clara expresión del carácter pos-revolucionario de este Estado en la conformación del bloque hegemónico donde la correlación de fuerzas había venido actuando en una dirección reformista para orientar políticas asistencialistas hacia ciertos sectores demandantes, de los cuales ha obtenido base social y legitimidad de poder político para llevar a cabo el proyecto económico capitalista de nación, que ha privilegiado a un sector muy reducido de la población a costa de la pauperización de la gran mayoría, sobre la base de un modelo de desarrollo desigual.

Desigualdad que obviamente implica la cuestión regional a partir de la consideración de concentración de inversiones en territorios estratégicos desde el punto de vista político y económico y de explotación de recursos naturales; desigualdad que también se expresa a nivel local y, en general, en todos sus ámbitos.

En los últimos años estas desigualdades regionales se han agudizado cada vez más en el contexto de la política económica neoliberal que se ha venido aplicando desde hace dos sexenios. Neoliberalismo que deriva de los postulados impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a partir del enorme endeudamiento en el que han sumido estos gobiernos a nuestro país en magnitud de una profunda crisis incomparable a cualquier periodo; política económica que evidencia el enorme poder del capital financiero internacional al grado tal de reorientar el rumbo y el carácter del Estado posevolucionario hasta su total transformación que se viene expresando

* Profesor de la Maestría en Planeación Urbano-Regional, Instituto Politécnico Nacional.

en liquidación de prácticamente toda la planta productiva que es patrimonio de todos los mexicanos, privatización de infraestructuras, equipamientos y servicios, dando al traste con todo el esfuerzo y sacrificios que tanto han costado a nuestro pueblo durante décadas. Enorme costo social de tal proyecto económico que vienen pagando con sus excedentes cada vez más un mayor número de regiones a unas cuantas ciudades donde se concentran las inversiones, bajo la lógica de socializar los costos y privatizar los beneficios.

En el contexto del neoliberalismo, las políticas de ajuste y austeridad han tenido un fuerte impacto en el deterioro de las condiciones materiales de vida de las mayorías de la población, caída de los niveles salariales, incremento del desempleo y la proliferación de la economía informal como una expresión de éste y un aumento de la migración de la población a los principales centros urbanos del país en busca de mejores expectativas de vida.

El agravamiento de esta problemática económica tuvo su expresión política álgida en el proceso electoral de 1988, al darse una importante movilización de un significativo sector de la sociedad civil con una propuesta democrática alternativa para salirle al paso al modelo económico neoliberal que tantos estragos ha venido causando a las mayorías de la población en las distintas regiones del país.

En este ámbito los resultados de tal experimento neoliberal son a todas luces dramáticos para más del 50% de la población sumida en la pobreza y la pobreza extrema. Pobreza extrema que dentro de los parámetros sociológicos de estratificación se refiere a los pobres de los pobres que son 17 millones de personas,¹ los que no sólo no alcanzan a cubrir el costo de la canasta normativa alimentaria básica en el planteamiento para medir la pobreza de COPLAMAR, sino que ni siquiera pueden consumir los nutrientes proteínicos y de calorías esenciales para llevar una vida sana y productiva y poder vender su fuerza de trabajo, es decir, al borde de la muerte por desnutrición. A esta población se orienta el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), eje de la política social del gobierno

que acaba de concluir, con base en la supuesta estrategia descentralizadora del fortalecimiento municipal donde se definen democráticamente las obras sociales prioritarias y apoyado en las organizaciones colectivas, poniéndolas a trabajar a través de los Comités de Solidaridad para la obtención de obras y servicios públicos, que es obligación del Estado proporcionar.

De tal manera que las regiones de la pobreza cada vez se extienden más por todo el territorio nacional mostrando un panorama precario sobre todo en las regiones habitadas por grupos étnicos. Tal es el caso del estado de Michoacán, un ejemplo significativo del atraso y marginalidad que prevalece en nuestro país y donde se han venido implementando importantes acciones del PRONASOL, situación que se inscribe en la coyuntura político electoral que dio lugar a una nutrida efervescencia social de apoyo para con el cardenismo en el Frente Democrático Nacional, hecho que motivó por parte del Estado a través de acciones de política social con Pronasol, diluir el avance de la oposición al proyecto neoliberal. En este sentido adquiere especial relevancia el estudio de la región de Michoacán a la luz del impacto del proyecto económico en el deterioro de las condiciones materiales de vida de la población, proyecto económico guiado por la idea empujinada de primero alcanzar el crecimiento económico y luego, si hay recursos, disfrutar automáticamente del tan pregonado bienestar social.

Michoacán es uno de los estados más pobres del país junto con Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, considerado en la geografía de la marginalidad elaborada por COPLAMAR como de alta marginalidad en el país, a pesar de tener una importante participación en el Producto Interno Bruto a nivel nacional y de contar paradójicamente con grandes recursos naturales.

Michoacán se ubica en la región centro occidental de la República mexicana, limitando al norte con los estados de Jalisco y Guanajuato, al noroeste con Querétaro, al este con el Estado de México, al sureste y sur con Guerrero, al oeste con Colima y al suroeste con el océano Pacífico. Situación que le confiere la ventaja de formar parte de la región centro, de importante actividad económica a nivel nacional.

La entidad tiene una extensión de 59 864 kms², ocupando el décimo sexto lugar nacional por este concepto; su marco geográfico es variado y complicado, dando lugar a diferentes

¹ Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. *El Combate a la Pobreza*, ed. El Nacional, México, 1990.

tipos de clima y suelos, que contribuyen a la formación de paisajes diversos y el desarrollo de distintos cultivos. Su población según el censo de 1990 es de 3 469 600 habitantes, representando el 4.3% de la población total del país, ocupando el séptimo lugar nacional, de los cuales el 63% es urbana y el 37% es rural, un 4% está integrada por grupos étnicos entre los que destacan los purépechas, náhuas, mazahuas y otomíes que se encuentran en la más aguda pobreza. Asimismo la entidad está integrada por 113 municipios y 8 236 localidades.

A pesar de tener uno de los índices más altos de natalidad del país, su dinámica de crecimiento demográfico a partir de la década de los años sesenta se ha venido expresando por debajo de la media nacional, así en los últimos años fue de 2.1% y las proyecciones apuntan a que seguiría disminuyendo, esto obedece principalmente a una tasa de migración negativa que tiene que ver con el deterioro de sus condiciones de vida.

La distribución espacial de la población en el estado evidencia una fuerte concentración en las principales ciudades y por otro lado una gran dispersión en el resto del territorio. El 21% de la población vive en los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora e incorporando Zitácuaro, Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Jacona se llega al 33% de los habitantes. En contraste, en 88 de los 113 municipios, del estado el porcentaje es menor al 1%, lo que muestra una clara tendencia urbana; en tal contexto Morelia, Uruapan y Zamora aumentaron su población en el total de la entidad de 17% en 1970, a 21% en 1980, y a 27% en 1990.

La población económicamente activa (PEA) del estado de Michoacán en 1990 se estima fue de 920 154 habitantes, correspondiendo el 40% al sector primario, el 12% al sector secundario, el 21% al terciario y el 27% en actividades no especificadas. Su Producto Interno Bruto (PIB) representa casi el 3% del PIB del país, ocupando el 14o. lugar nacional, sin embargo su PIB per cápita se encuentra en un 50% del promedio nacional lo que lo ubica entre los cinco más bajos del país.²

En datos del gobierno del estado de Michoacán se indica que:

La estructura de edades muestra que, del 49% en edad productiva solamente el 33% tiene ocupación en la región, 3% en los Estados Unidos de Norteamérica y 12% en el Estado de México y en el Distrito Federal. El 46% de la PEA se dedica a las actividades primarias, lo que muestra un bajo nivel de industrialización. El 52% de población en edad productiva está integrado por subempleados, desempleados, amas de casa, estudiantes y minusválidos. Solo el 18% de la PEA percibe ingresos iguales o superiores al salario mínimo. Esta situación resulta más crítica en varios municipios, como por ejemplo Susutao, que se encuentra con 97.07% de su PEA por abajo del salario mínimo, Epitacio Huerta con 96.01% y Tuzantla con el 90.12%.³

Población que en bienestar social presenta condiciones de nivel de vida en materia de ingresos, educación, vivienda, salud y alimentación que la sitúan por debajo del promedio nacional. El problema de la vivienda se presenta tanto en los déficits, como en altos niveles de hacinamiento que llega al 70% en las zonas rurales pobres y a una carencia casi total de servicios básicos de agua, drenaje, luz, etc. Cabe destacar que el mayor problema de la vivienda se encuentra en las principales ciudades del estado con población de más de 50 mil habitantes, derivado de la creciente inmigración; para 1990 se tenía un déficit de 150 mil viviendas, incrementándose cada año en 6 mil, frente a una producción anual insuficiente que no rebasa las 3 500 viviendas edificadas por Infonavi, Provisste, Promivi y Fidelac y sin contar la edificada por el sector privado que obviamente por su costo está fuera del alcance de los sectores mayoritarios que se ven obligados a optar por la autoconstrucción. El 40% de las viviendas tienen piso de tierra, en comparación con el 27% a nivel del país; el 32% carece de agua entubada, en contraste con el 28% del país; la tasa de analfabetismo de 10 años y más es de 22%, muy por encima del promedio del resto del país. Condiciones similares se encuentran en materia de ingresos, alimentación y salud que llega a niveles alarmantes,

² INEGI, *XV Censo General de Población y Vivienda*, 1990.

³ Gobierno del Estado de Michoacán. *Plan Básico de Gobierno del Estado de Michoacán, 1986-1992*.

presentándose enormes carencias en infraestructura y equipamiento y una creciente demanda de servicios que ubican a la entidad por debajo de los niveles medios del país, que lo sitúan entre los diez estados de mayor marginalidad. Indudablemente, al interior del estado también hay profundos contrastes en las condiciones del nivel de vida de la población y acentuados desequilibrios regionales que se manifiestan de manera por demás evidente de municipio a municipio, por ejemplo el analfabetismo de la población de diez años y más en los municipios de Morelia, Uruapan y Purépero, registra tasas de 10.9%, 14% y 13.7% respectivamente; en contraste Nocupétaro y Tuzantla dan cuenta de más del 45 por ciento.

Michoacán en general tiene una importante participación en la economía del país, contribuyendo principalmente con: el 8% del maíz, el 5% del arroz, frijol y trigo, el 12% del ajonjolí, el 10% del cártamo; el principal productor nacional de aguacate, fresa y melón; 12% de la carne de cerdo; 7.5% de la leche de bovino; 13% del plátano; 13% de la madera en rollo y 87% de la resina; 20.5% de la barita; 13% del hierro; 35% de la mojarra; 20.5% de la carpa; 17% del charal; 18% de la lobina y 8.5% del bagre.⁴ Producción que sin embargo presenta tendencias a la baja por la situación de crisis prevaleciente.

Se estima que en el estado de Michoacán la abrumadora mayoría de las empresas está constituida por micro, pequeñas y medianas, esto es alrededor del 98% de su planta industrial, las cuales se encuentran en serias dificultades económicas y riesgo de quiebra con lo que se incrementaría todavía más el desempleo deteriorando aún más los niveles de vida de la población. El empleo en Michoacán se encuentra entre los de menor índice de ocupación a nivel nacional, que en el lapso de 1980 al año de 1990, pasó de 30.4% de su PEA a 25% y que en la situación actual de crisis nos encontramos con un panorama alarmante en el mercado de trabajo, hecho que explica el atraso y la pobreza que se traduce en el fenómeno migratorio no sólo a las principales ciudades de la región y del país, sino también a la frontera norte. En éste sentido es muy claro el estudio de Wayne Cornelius que

muestra que Michoacán es el segundo estado del país con más índice de migrantes hacia California.⁵

Con base en estos planteamientos se pretende hacer un análisis de los alcances y perspectivas del Pronasol, como estrategia de política social en el marco del impacto del modelo económico neoliberal en las regiones en pobreza extrema, es el caso del estado de Michoacán, identificando los factores que han propiciado el rezago y el deterioro de las condiciones materiales de vida en la entidad.

¿Los planes y programas de desarrollo regional implementados por el Estado mexicano en el marco de la política social desde décadas atrás, han coadyuvado a resolver la problemática de la desigualdad y la pobreza o es parte del discurso de justicia social en que ha estado atrapado el Estado postrevolucionario y de donde ha obtenido legitimidad y consenso que le ha dado margen de maniobra?

¿Acaso no entran en contradicción estos planes con el modelo de política económica neoliberal o responden a los lineamientos fondomonetaristas?

La planeación del desarrollo regional puesta en práctica por el Estado mexicano en el contexto del modelo económico neoliberal ha venido operando para apuntalar a los rubros más rentables para los grupos hegemónicos y los grandes capitales, agudizando las desigualdades sociales y regionales.

En este sentido el Pronasol, ante una sociedad más organizada y politizada, cobra sentido a través de proyectos sociales emergentes y de apoyo a la sobrevivencia de la población en pobreza extrema, reflejando un carácter coyuntural y asistencialista hacia las regiones más atrasadas del país, y orientando sus acciones a la atención de las necesidades más elementales de bienestar, por encima de atender la generación de empleos.

Situación que permite afirmar que Pronasol es sólo un paliativo a la pobreza extrema en Michoacán, pobreza que no solo va a continuar sino que se va a agravar, deprimiendo a sectores de la clase media a niveles de subsistencia, promoviendo la segregación y la migración, incrementando el desempleo y la economía informal y cayendo su aportación al PIB nacional.

⁴ Gobierno del Estado de Michoacán. *Plan Básico de Gobierno del Estado de Michoacán, 1986-1992.*

⁵ Cornelius, Wayne. "Los Migrantes de la Crisis", en *Federalismo y Desarrollo*, BANOBRAS, núm. 20, México, 1990.

El Pronasol sólo ha venido a aligerar el impacto de la política de austeridad y ajuste y a evitar el alto costo social.

Política social que supone que el problema de la pobreza en México es producto de la dinámica poblacional tan alta que no permite que alcancen los recursos y sean siempre insuficientes; con tal idea no se abordan las causas, ni se modifica su base estructural que ha propiciado la pobreza.

La política social como estrategia

La actuación del Pronasol como eje de la política social del periodo que acaba de concluir y que se había planteado como propósito fundamental el combate a la pobreza extrema, debe someterse a revisión y evaluación, dado que la problemática de la desigualdad social adquiere hoy día un interés manifiesto.

La implementación del Pronasol en la región del estado de Michoacán como instrumento de la Federación para resolver los grandes problemas de la pobreza, se sustenta en los lineamientos estratégicos de la descentralización, el fortalecimiento municipal y la movilización y la organización de la población en Comités de Solidaridad; población de mandante de obras y servicios públicos que está compuesta por: indígenas, campesinos pobres y los grupos populares urbanos marginados.⁶ Los recursos financieros para tal cometido se apoyan en lo rescatado de la renegociación de la deuda externa y los recursos obtenidos por la venta de empresas parastatales no prioritarias.

El Pronasol se apropia y hace suyos los programas y presupuestos que se venían ejerciendo a través de los recursos del Ramo XXVI y Desarrollo Regional que se han otorgado a los estados mediante el Convenio Único de Desarrollo (CUD), hoy Convenio de Desarrollo Social (Codesol).

Michoacán, caso de estudio muy significativo de lo que acontece en muchas regiones del territorio nacional que ubica a la entidad entre las más atrasadas del país, cuenta con acentuados contrastes socioeconómicos como expresión del mo-

dolo de desarrollo económico desigual y se manifiesta con mucho mayor impacto en las regiones habitadas por etnias y campesinos pobres.

La actuación de Solidaridad en Michoacán

La política social ha sido una constante en el discurso de los planes y programas, como sucede en el Programa de Desarrollo Integral del estado de Michoacán y cuyo propósito fundamental estriba en el mejoramiento del nivel de vida de los michoacanos. Satisfacción de las necesidades elementales de la población en pobreza extrema: alimentación, salud, educación, vivienda y servicios en poblados rurales, colonias populares, comunidades y ejidos que carecen de ellos; tales problemas son enfrentados a través del Pronasol y sus tres vertientes: Solidaridad para el Desarrollo Social, Solidaridad para la Producción y Solidaridad para el Desarrollo Regional; además, se ponen en marcha programas especiales: Fondos de Solidaridad para la Producción, Fondos de Solidaridad para Escuela Digna, Niños en Solidaridad, Mujeres en Solidaridad, Agua Potable y Acatarrillado en Zonas Urbanas y Hospital Digno. Y, para tales acciones la entidad se divide en seis regiones económicas donde se identifican los rezagos sociales: centro, oriente, tierra caliente, costa, occidente y ciénega.

Para la implementación de Solidaridad la participación de la población es de suma importancia y para tal propósito se han constituido en Michoacán 4 769 Comités de Solidaridad de 1989 a 1991.

En el periodo de la primera mitad de la administración salinista, que es hasta donde aborda esta parte de la investigación, se ejercieron recursos a través de Solidaridad para Michoacán por \$ 691 011.5 millones de pesos en los diversos programas y regiones, recursos que han sido canalizados para construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable, clínicas y hospitales, escuelas, electrificación, becas, urbanización, seguridad pública, carreteras y caminos rurales, entre otros.

⁶ Poder Ejecutivo Federal. *Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994*, S.P.P., México, 1989.

Recursos Ejercidos por Programa, 1989-1991 (millones de pesos)

Programa	Recursos	%
Total	691 011.5	100.0
Solidaridad para el Bienestar social	309 707.9	44.8
Solidaridad para la Producción	211 190.7	30.6
Solidaridad para el Desarrollo Regional	170 112.9	24.6

FUENTE: Gobierno del Estado de Michoacán.

El mayor gasto se destinó a programas para el bienestar social.

La región con mayor inversión es la centro, en ella se encuentran 35 de los 113 municipios del Estado (30%); 1 808 localidades de las 7 716 (23%) y 1 288 159 habitantes, 36% del total. La inversión aquí aplicada, \$ 220 179.9 millones, equivale al 32% del total de la inversión. A pesar de no ser la región de mayor atraso y marginación.

Otro importante programa que se implementó fue el Programa del Oriente de Michoacán, estableciendo como propósito el resolver las condiciones de miseria y penuria de esta región del estado que se caracteriza por ser zona de importantes grupos étnicos y de 21 comunidades indígenas, con 40 000 habitantes mazahuas, otomíes, purépechas y náhuas⁷, región habitada por 437 904 personas. De esta población el 85% se ubica en poblaciones menores de 2 500 habitantes, lo que muestra la gran dispersión, sobre todo rural.

Los objetivos centrales del Programa de Desarrollo del Oriente de Michoacán son: impulsar el desarrollo económico de la región y elevar el nivel de vida de su población, y como estrategia promover el desarrollo sectorial aprovechando la capacidad productiva de la zona, ampliar la infraestructura, modernizar al municipio y procurar la generación de empleos.⁸ Sin duda propósitos que en su discurso suenan bien, pero que

en la práctica sólo quedaron en buenos deseos con obras dispersas y sin apuntalar la planta productiva.

Este programa se pone en marcha con un presupuesto de \$67 745 millones erogados en los 16 municipios que integran la región, siendo los municipios de Hidalgo, Maravatio, Zitácuaro, Tuxpan y Angangueo a los que se destinó la mayor inversión, el 64% del total, a pesar también de no ser los municipios con mayores carencias, pero que es evidente que prevalecieron los compromisos y las alianzas con los grupos de poder local.

Es indudable que la pobreza se combate creando fuentes de trabajo con salarios bien remunerados para la mayoría de la población, sin embargo la prioridad de Solidaridad Social en Michoacán se ha orientado a la vertiente de Solidaridad Social en un mayor porcentaje de recursos que asciende casi al 45% del total estatal y en menor porcentaje a Solidaridad para la producción 30% del total, y sólo un 25% a Solidaridad para el desarrollo regional.

El importante crecimiento del presupuesto con que ha contado Solidaridad para el estado de Michoacán, ante la magnitud de los rezagos sociales, éste aún resulta insuficiente, y en este sentido, el análisis que han hecho algunos investigadores respecto a la proporción que guardan los recursos con la población demandante, traducido a la situación particular de la entidad se expresa de la siguiente manera: de un presupuesto ejercido de \$ 691 011.5 millones a través de Solidaridad, del año de 1989 a 1991, dividido entre la población objetivo del Programa, se observa que, el gobierno habría destinado 153.55 pesos por año a cada persona, es decir 12.7 pesos al mes, poco más de un salario mínimo, lo cual resulta a todas luces insuficiente y además, dedicando tiempo en las jornadas de trabajo y aportando materiales la población, con lo que se evidencia que la estrategia del combate a la pobreza se basa en cargar prácticamente todo el peso de la solución de sus carencias a la misma población demandante.

La situación económica del estado de Michoacán sigue siendo alarmante dado que, de la población ocupada, el 20% se dedica a la agricultura en una superficie de 1 289 718 has. de las cuales el 28.6% son tierras de riego y el 71.4% son de temporal y además erosionadas; el 15% a la industria pequeña, mediana

7 INEGI. *XV Censo General de Población y Vivienda*, 1990.

8 *Programa de Desarrollo del Oriente de Michoacán*, Programa Nacional de Solidaridad, México, 1991.

y artesanal, principalmente de carácter familiar y que está prácticamente en quiebra, y el 65% al comercio y a los servicios y donde destaca la enorme proliferación del ambulante y economía informal en las principales ciudades, sector que atravesará por graves dificultades para sobrevivir por la contracción del mercado interno. Estructura económica de la cual el 50% del ingreso va a dar a manos del 10% de la población, en un reparto inequitativo de la riqueza social; además de que los inversionistas michoacanos vienen dedicándose cada vez más a la especulación y extraen sus ganancias y las colocan en los mercados financieros de la ciudad de México y de Jalisco.

Los resultados de la política social en Michoacán a través de Solidaridad reflejan que los programas implementados no han contribuido a resolver el problema de la pobreza y la marginación y los datos a este respecto son muy elocuentes: los niveles de alimentación en las zonas indígenas rurales de la entidad han caído, ubicándose esta población rural entre los cinco estados del país que en menor proporción consume los nutrientes básicos, ya que el consumo de maíz disminuyó en 1991 con respecto a diez años antes, también el consumo de trigo y sus derivados se redujo, junto con la leche, tomate y chile y en general el consumo de los alimentos básicos en la dieta de las comunidades indígenas; es decir, si en el periodo de 1978 a 1989, más de 60% de la población rural de Michoacán se caracterizó por tener un consumo deficiente de proteínas de origen animal y un mayor consumo de tortillas de maíz y frijol, hoy día hasta éstos alimentos se le dificultan adquirir, por lo que la desnutrición se ha acentuado sobre todo en los niños menores de cinco años y que afecta al 90% de los infantes indígenas menores de doce años. Situación que está minando seriamente la salud de la población; como consecuencia de ello, 30% de la población adulta padece de tuberculosis primaria,⁹ incrementándose en los últimos años en más del 100% las enfermedades endémicas con lo que asistimos a una generación de población desnutrida y afectada por lesiones irreversibles en sus capaci-

dades y desarrollo físico y vulnerable a enfermedades y epidemias que se consideraban erradicadas.

En el municipio de Aguila, que tiene una población de 25 mil habitantes, de los cuales el 80% son indígenas náhuatl que habitan en 15 localidades, ya se han presentado casos de muerte de niños por enfermedades causadas por una alimentación deficiente.¹⁰

Conclusión

Es indudable que la pobreza se combate creando fuentes de trabajo con salarios bien remunerados para la mayoría de la población, lo que Pronasol no ha venido haciendo en el estado de Michoacán, dado que sus recursos los ha orientado a la realización de obras y proyectos sociales emergentes ubicados en el rubro de Solidaridad Social en un porcentaje mayor que el impulso a la producción y al desarrollo regional, a pesar de la tan pregonada mayor cantidad de recursos sin precedente en la historia reciente de la política social del país, afirmación que es puesta en evidencia en un estudio de Mario Zepeda, donde se muestra claramente que los recursos del Ramo XXVI Solidaridad y Desarrollo Regional de 1991 ascienden a 5.117 billones de pesos y descontando el impacto de la inflación, esta cifra se reduce a 34 mil millones de pesos de 1980 resultando menor a los recursos reales ejercidos de 1980 a 1982 en el mismo Ramo; también, el gasto público total es hoy proporcionalmente menor respecto al PIB, de lo que era al inicio de los años ochenta; así, la proporción del gasto programable en el año de 1982 fue de 3.85% en contraste con 3.59% del gasto de 1991.¹¹

En torno a la tan festinada estrategia de la descentralización, con fortalecimiento municipal y respecto a sus formas autónomas de organización de las comunidades, en los Comités de Solidaridad con que ha operado Solidaridad solo ha quedado aquéllo en el discurso, tan publicitado que no se ha llevado a la práctica y,

⁹ *La Jornada*, artículo de Teresa Gurza.

¹⁰ Datos de investigadores economistas de la UMSNH, 1994.

¹¹ "Solidaridad", Revista *El Cotidiano*, ed. UAM-Azcapotzalco, México, julio-agosto, 1992.

bajo esta perspectiva, los recursos se han seguido manejando de manera centralizada y discrecional, careciendo el municipio de recursos propios y dependiendo totalmente de las entidades y la federación; se ha impuesto un esquema de control político para la población demandante, en el cual es condición organizarse en Comités de Solidaridad para tener acceso a los limitados recursos para la realización de las obras, aportando además mano de obra y materiales, con resultados para la población de división entre sí y clientelismo político al grado tal que en Michoacán se modificó la tendencia electoral en favor del partido oficial.

La implementación del Pronasol en el estado de Michoacán lejos de guiarse por niveles de atraso y marginalidad, ha venido operando con base en criterios de actividad económica de grupos de poder local y de importancia política con riesgo de movilización social en las regiones de mayor concentración poblacional, es el caso de la región centro de la entidad. Por lo tanto, la política de desarrollo regional no ha sido una prioridad para Solidaridad a pesar de haberse planteado importantes programas, prueba de ello es la mínima cantidad de recursos destinados para impulsar la capacidad productiva de la zona y apuntalada por una importante infraestructura para elevar el nivel de vida de la población.

En la región de Michoacán la pobreza lejos de resolverse se ha agravado al incrementarse la concentración del ingreso en unos cuantos monopolios financieros nacionales y extranjeros y con el incremento del desempleo que lleva drástica caída salarial de los pocos trabajadores en activo, inequidad que va en aumento con riesgos de ruptura y conflictos sociales por la penuria de cientos de miles de personas. En el medio rural el panorama es todavía más crítico con las reformas al artículo 27, sobre todo en las zonas marginadas del estado donde habría que agregar el deterioro de la naturaleza por falta de políticas de protección ambiental, contribuyendo a un mayor empobrecimiento de la población por la dificultad de seguir produciendo, de tal manera que todos estos factores: caída del producto por habitante, disminución de salarios, incremento del desempleo, caída de los precios de garantía, deterioro de la naturaleza y reducción del gasto social, muestran un panorama desolador.

Ante el fracaso de la planeación regional en el estado de Michoacán urge su reformulación, haciendo a un lado el centralismo, a partir de reconocer que la relación indisoluble entre aparato de Estado y Región forman parte de un solo proceso en el que ambos son actores generadores de proyectos de desarrollo discutidos y aprobados por consenso por la sociedad civil con base en sus necesidades prioritarias y sus recursos naturales disponibles para impulsar el crecimiento guiado por factores políticos y sociales como los determinantes y, bajo esta perspectiva, conviene reencausar la vigorosa movilidad social de la población con un programa político de carácter regional y una visión de conjunto del territorio nacional.

Se debe replantear la política económica neoliberal seguida por nuestros país, por otro modelo de desarrollo económico alternativo ampliamente consensado, que concilie crecimiento económico y equidad en el reparto, buscando proteger la planta productiva generadora de empleos y a los trabajadores con buenos salarios y moderados precios, gravando las ganancias especulativas; en este contexto el desarrollo regional deberá formar parte de las políticas públicas donde el desarrollo pasa necesariamente por la democracia.